

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público



Juzgado Diecinueve Civil Municipal

Bogotá D.C, diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022).

Ref. No. 2020-00049.

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el despacho a resolver lo que en derecho corresponda frente al **recurso de reposición y en subsidio apelación** formulado por la parte actora contra el auto de fecha 27 de enero de 2022 mediante el cual se decretó la terminación del proceso por desistimiento tácito.

II. ANTECEDENTES

1. El apoderado judicial de la parte recurrente adujo que, el auto mediante el cual se declaró la terminación del proceso por desistimiento tácito debe ser revocado, toda vez que, ha venido cumpliendo con la carga procesal de notificar al extremo demandado, amén que no se tuvo en cuenta lo dispuesto en el inciso 3 del numeral 1° del artículo 317 del C.G.P.

Manifestó que, de un lado, que el proceso no ha permanecido inactivo y, de otra parte, no se tuvo en cuenta que previo al requerimiento para notificar a la parte ejecutada se había radicado a través del correo institucional el 3 de noviembre de 2021 una solicitud para requerir a las entidades financieras de manera que se encontraban pendientes actuaciones encaminadas a consumir las medidas cautelares previas.

2. De conformidad con los artículos 110 y 319 del Código General del Proceso se corrió traslado del recurso de reposición a la parte pasiva quien dentro del término no se pronunció al respecto.

III. CONSIDERACIONES

1. Ciertamente es que los medios de impugnación son instrumentos procesales puestos a disposición de las partes, orientados a corregir las posibles equivocaciones que el juez, en su labor de administrar justicia, defina en las decisiones que profiere. Uno de ellos es el recurso de reposición, cuya finalidad es conminar a la misma

autoridad que profirió una decisión, para que la estudie nuevamente y determine si hay lugar a revocarla, modificarla, aclararla o adicionarla, teniendo en cuenta si incurrió en una omisión o aplicó indebidamente la ley.

2. Como primera medida, cumple precisar que la notificación del mandamiento de pago o el auto admisorio de la demanda al extremo pasivo del litigio constituye un acto de suma importancia, por cuanto, de éste depende el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción, y por ende el debido proceso, que garantiza una adecuada administración de justicia, sobre el punto la Corte Constitucional en Sentencia T-225 de 2006 precisó:

“Ha sido reiterada jurisprudencia de la Corte, que para garantizar la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso y el derecho de defensa, es necesario que las personas que puedan resultar involucradas en procesos judiciales, cualquiera sea su naturaleza, deban ser enteradas acerca de la existencia del proceso mediante la notificación personal de la primera providencia que se profiere en el mismo, bien trátase de auto admisorio de la demanda o bien de mandamiento ejecutivo o de pago. Noticia de la existencia del proceso que debe hacerse en primer lugar, agotando todos los mecanismos dispuestos en la ley para hacerla de manera personal, y sólo en la medida en que no sea posible cumplir con ésta diligencia es pertinente, de manera subsidiaria, recurrir a otras formas dispuestas para el efecto por la ley”

Ahora, en cuanto a la terminación anormal del proceso consagrada el artículo 317 del Código General del Proceso la corporación en cita en ejercicio del control constitucional del literal g del numeral 2° precisó que: *“El desistimiento tácito, además de ser entendido como una sanción procesal que se configura ante el incumplimiento de las cargas procesales del demandante, opera como garante de: (i) el derecho de todas las personas a acceder a una administración de justicia diligente, celer, eficaz y eficiente; (ii) la posibilidad de obtener pronta y cumplida justicia y (iii) el acceso material a la justicia, en favor de quienes confían al Estado la solución de sus conflictos. Todo esto en el entendido de que la racionalización del trabajo judicial y la descongestión del aparato jurisdiccional, finalidades a las que aporta la decisión de terminar anticipadamente un trámite judicial, contribuyen significativamente a hacer más expedito el trámite de los litigios judiciales.”*¹

De lo anterior se desprende que la figura en comento, puede ser entendida, de un lado, como una consecuencia procesal acaecida en razón a la negligencia, omisión, descuido o inactividad de la parte que ejerce el derecho de acción, en términos generales se sanciona la falta de interés para continuar con el proceso y de otro lado, como un modo de garantizar la administración de justicia de forma celer y eficaz evitando la congestión judicial por actuaciones no atendidas en debida forma, operando en dos eventos en particular, el primero de ellos, que es el aplicado en el caso concreto, señala que hay lugar a la terminación del asunto:

¹ Corte Constitucional, Sentencia C-173 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.

“1. Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requerirá el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado.

Vencido dicho término sin que quien haya promovido el trámite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación y así lo declarará en providencia en la que además impondrá condena en costas

El juez no podrá ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando estén pendientes actuaciones encaminadas a consumir las medidas cautelares previas”

A su vez el artículo 117 de la Ley 1564 del 2012 establece que los términos señalados para la realización de los actos procesales son perentorios e improrrogables salvo disposición en contrario de manera que deben ser acatados con estrictez pues su inobservancia surtirá los efectos a que haya lugar.

3. Descendiendo al caso puesto a consideración del despacho, se advierte que mediante auto de fecha 12 de noviembre de 2021, se requirió a la parte actora para que dentro del término de treinta (30) días contado a partir de la notificación de ese proveído adelantara las gestiones tendientes al enteramiento del mandamiento de pago al demandado, so pena de dar aplicación a la sanción procesal de que trata el numeral 1° del artículo 317 del Código General del Proceso.

En razón a lo anterior, comoquiera que el aludido término transcurrió sin que la parte demandante diese cumplimiento a lo dispuesto, el expediente ingresó al despacho para lo pertinente, motivo por el que el 27 de enero de los corrientes se dispuso la terminación del presente asunto por desistimiento tácito.

Bajo esta perspectiva, revisadas las actuaciones surtidas se advierte que le asiste razón al extremo censor, toda vez que, mediante auto de fecha 3 de marzo de 2020 se decretó como medida cautelar el embargo y retención de dineros que posea la demandada en cuentas bancarias sin que al interior del asunto obren la totalidad de las respuestas emitidas por las diferentes entidades financieras, razón por la que no resultaba procedente realizar el requerimiento para efectos de notificar al extremo ejecutado y mucho menos decretar la terminación del proceso por desistimiento tácito como quiera que se existen actuaciones pendientes encaminadas a la consumación de las cautelas solicitadas, en consecuencia, sin mayores acotaciones se impone revocar la providencia objeto de censura.

4. Finalmente, ante la prosperidad del recurso aquí impetrado se negará la apelación interpuesta en forma subsidiaria.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Diecinueve (19) Civil Municipal de Bogotá D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

V. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el auto de fecha 27 de enero de 2022, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR el recurso de apelación conforme a lo dicho en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Por secretaría oficiase a BANCO DE OCCIDENTE, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DAVIVIENDA, BANCO AGRARIO, BANCO ITAÚ, BANCO FALABELLA, BANCAMIA, BACOLOMBIA S.A, BCSC, BANCO GNB SUDAMERIS, BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCOMPARTIR, BANCO POPULAR, BANCO W, SCOTIABANK COLPATRIA, BANCO PICHINCHA, BANCOOMEVA, PROCREDIT, BANCO FINANDINA., tramítese conforme a lo normado en el artículo 11 del Decreto 806 de 2020.

Notifíquese,²

**IRIS MILDRED GUTIÉRREZ
JUEZ**

² Este proveído se notificó por estado No. 026 de 11 de marzo de 2022.

Firmado Por:

**Iris Mildred Gutierrez
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Civil 019
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **82e928e98cd69aa35b52f1fef14376f95545e7f131c12a8206af4f41ca077a04**

Documento generado en 10/03/2022 10:54:32 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>